

Latinoamérica

Científicos, técnicos, estudiantes,
sindicalistas y sacerdotes:
el régimen del general Videla
se ha propuesto acabar
con todo lo que piensa,
y lo está consiguiendo.

LA ARGENTINA DE LOS CUCHILLOS LARGOS

PHILIPPE GARNIER RAYMOND

BETTINA Tarnopolsky tenía quince años. Se presentaron en su casa, en el número 2600 de la calle de la Peña, de Buenos Aires, a las tres de la mañana. Eran cuatro hombres: cuatro hombres armados para detener a una colegiala. Se dice que iban provistos del mandato, pero no lo llegaron a mostrar. Ni siquiera llamaron a la puerta. Prefirieron hacerla saltar con explosivos. Bettina no estaba en casa. Pero estaba su padre, el ingeniero químico Hugo Tarnopolsky, y su madre, Bianca, profesora de psicología, especialista en reeducación de minusválidos.

Se llevaron al matrimonio por la fuerza hasta casa de la abuela, donde lograron, por fin, capturar a Bettina. Mientras tanto, en el extremo opuesto de la ciudad, otro equipo se encargaba de secuestrar al hermano de Bettina, Sergio, y a su esposa, Laura. Era el 15 de julio del pasado año. Dos horas duró la "razzia", en la que cayó toda la familia Tarnopolsky. Desde entonces, los abogados, invocando el "habeas corpus", no han dejado de realizar investigaciones cerca de los tribunales y los Ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas. Han examinado principalmente los archivos de las cárceles de Buenos Aires, de Córdoba y de otras partes: nada, ni una sola huella. Los Tarnopolsky nunca existieron.

¿Qué ha sido también del físico Federico Luden, secuestrado en La Plata en diciembre de 1976, o del meteorólogo Ricardo D. Chidichimo, al que metieron en noviembre pasado en el portaequipajes de un automóvil militar sin que se hayan tenido más noticias de su persona?

¿Dónde están los estudiantes Eduardo Muñiz, Pablo Fernández Meljide y cientos de sus compañeros? Nadie lo sabe. Sí hay, por el contrario, noticias de los sociólogos R. M. Toer y H. Alvarez Trafal. Ambos fueron atrocemente torturados. El primero, recluido en la cárcel de Buenos Aires, está hoy ciego; el segundo agoniza en una celda de La Plata.

Por su parte, el físico nuclear Manuel M. Tarchysky, del Centro Atómico de Bariloche, detenido el



23 de septiembre de 1976, fue asesinado por sus torturadores. Su cadáver apareció a comienzos de octubre en una calle de Bahía Blanca.

Se sabe igualmente cuál fue la suerte del ginecólogo Salvador Ackerman. El 6 de junio de 1976, "un grupo sin identificar" le secuestró de la clínica de Don Torcuato, situada al Oeste de Buenos Aires. Sus raptos le dieron muerte inmediatamente. Se rumorea con insistencia en Buenos Aires que el doctor Ackerman jugó cierto papel en el secuestro de Adolf Eichmann. Es posible... En un país donde vive la cuarta comunidad judía del mun-

do (600.000 personas), la represión tiene que adoptar necesariamente una fuerte dosis de antisemitismo. A comienzos de febrero se produjeron explosiones en los cines que programaban la película "Victoria en Entebbe".

La Junta del general Videla ha emprendido un genocidio en toda regla. Sólo que esta vez no se trata de eliminar a una etnia, a un pueblo, a los seguidores de una divinidad sospechosa. Los golpistas del 24 de marzo de 1976 se han propuesto exterminar a toda la "intelligensia".

No todos los días se da un genocidio de tipo suicida. Pues, ¿qué se-



Videla ha decidido eliminar a la "intelli

rá la Argentina una vez que desaparezcan sus físicos y sus químicos? Su escuela de Matemáticas era una de las más avanzadas del mundo: ya no existe. Los psiquiatras, los psicólogos argentinos, han acabado en la cárcel, en el exilio o en la tumba. Se han desmantelado como "fortines de la subversión" el Centro Municipal de Salud Mental número 2 en Buenos Aires, los servicios de psiquiatría del hospital Borda, las policlínicas Finochietto en Avellaneda y Aroz Alfaro en Lanús... Han sido detenidos miembros de la Sociedad Argentina de Psiquiatría y se ignora qué haya podido ser de su presidente, el doctor Juan Carlos Risau.

Bibliotecas incendiadas

Algunas semanas después del "putsch", la Junta decidía dar un golpe en un conocido reducto de la "subversión marxista": la Comisión Nacional de la Energía Atómica. El 19 de abril de 1976, el ejército decapita literalmente a la investigación nuclear argentina al detener al físico Antonio Misetich, ex profesor del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y jefe del programa atómico argentino. Misetich era, sin embargo, una víctima demasiado escandalosa: en respuesta a la campaña lanzada por sus colegas americanos, los militares aceptaron dar noticias suyas. Misetich está efectivamente en la cárcel y, según afirman las autoridades de Buenos Aires, goza de buena salud. Pero nada se sabe del ingeniero Ardito,



gentea" y a las clases medias argentinas, que inspiran y financian, según parece, a la CGT y a los montoneros.

que trabajaba en el ciclotrón de la Comisión Nacional y fue secuestrado en junio junto a su mujer. Igualmente han desaparecido sus colegas Federico y Hilda Alvarez.

Otro físico, Gallardo, parece que está en la prisión de Córdoba, pero no existe constancia. ¿Dónde se encuentra hoy la ingeniero Gabriela Carabelli? La secuestraron junto a su hijo de tres años. El niño fue hallado por casualidad en una cama de hospital. Se ignora qué ha sido de su madre.

Cada semana, Argentina conoce sus "noches de los cuchillos largos". Se incendian sinagogas, se fusila a intelectuales. Así, en el patio de la cárcel de La Plata se pasó por las armas al director del periódico "Descamisado", Dardo Cabo, junto a su colega Roberto Pirles. Tras la ejecución, dos hombres enmascarados advertían a los cuarenta prisioneros políticos que si los guerrilleros ejercían represalias todos ellos serían ejecutados.

Todo eso ocurre en un clima inquisitorial. Marx y Freud están prohibidos, naturalmente. Pero también Piaget, amén de todas las obras de física, química y ciencias en general en las que aparecen palabras como "materia" o "material".

En el mismo orden de ideas, la enseñanza de la lingüística chomskyana está castigada con la cárcel. El coronel del Ejército del Aire H. Ruiz, rector militar de la Universidad de Cuyo, organiza asaltos nocturnos a las casas de los estudiantes. Se embargan y se incendian bibliotecas enteras. Como en "Fahrenheit 451". Se rumorea in-

cluso que hay profesores que dan sus clases en la clandestinidad, sin libros y sin notas.

El más vil de los suplicios

Todo eso ocurre en un país de diez millones de habitantes que debiera ser precisamente el más próspero de la América Latina con su cabaña, la primera del mundo, una notable industria de transformación —700.000 metalúrgicos—, sindicatos superpoderosos, más una Constitución calcada de la norteamericana, aunque con el añadido del Estado de sitio. Sin embargo, la Argentina ha devaluado su moneda en un 389 por 100 en un año. Cada ciudadano argentino continúa consumiendo ochenta kilos de carne al año. Mas el paro sigue ganando terreno, las Universidades están vacías y el país vive un clima de guerra civil. En la base de todo figura aún, después de la muerte de Perón, el peronismo. Un movimiento que ha sepultado a los partidos y que engloba toda la vida política argentina. El proyecto de la Junta está claro como el agua: restablecer el peronismo cabal, romper los sindicatos y frenar la rebelión armada. Como no tiene medios para lograr directamente ese triple objetivo, Videla ha optado por eliminar a la "intelligentsia" y a las clases medias que inspiran y financian, según parece, a la CGT y a los montoneros. También se ha propuesto meter en cintura al clero del país.

Durante los últimos doce meses han sido asesinados en Argentina

un obispo, once sacerdotes y una religiosa. Han desaparecido igualmente cuarenta sacerdotes; otros diez están entre rejas. Situación única en el mundo: un 10 por 100 de los curas argentinos viven en la clandestinidad. Sus familias son objeto de persecución. A sus miembros se les reserva el más vil de los suplicios: militares especializados matan de hambre a una rata durante varios días hasta que el animal se convierte en carnívoro; luego la introducen en el intestino de su víctima. Por ese método acaba de morir, por ejemplo, el padre Pablo Gazzardi.

El régimen no perdona siquiera a los niños. El 13 de mayo del pasado año, es decir a sólo seis semanas del golpe de Estado, el coronel Héctor Laborda, delegado militar cerca del Consejo Nacional de Educación Técnica, distribuyó por las escuelas un folleto en el que se decía, entre otras cosas, que "toda actividad sospechosa deberá ser denunciada por el director a la autoridad policial o militar correspondiente".

Al mismo tiempo se promulgaban algunos textos oficiales en los que se ponía de manifiesto que la subversión era una "enfermedad hereditaria y transmisible". Sólo así se explica la detención de familias enteras. Para justificar su acción, los militares se han inventado el delito de "Infiltración ideológica". Las desapariciones se multiplican en los medios escolares.

Bernicio Villareal, ministro de Educación Nacional, declaraba en septiembre pasado: "No podemos tolerar la subversión precoz". Am-

nesty International calcula que varios centenares de estudiantes argentinos han sido secuestrados y seguramente asesinados desde el golpe de Estado militar.

El "dossier" argentino crece diariamente. Sin embargo, nadie habla de eso. En el extranjero sólo se habla de los montoneros y de sus acciones armadas y se subraya que el PC argentino es legal y que en ningún caso podría equipararse el drama argentino al chileno.

Extrañamente, el Departamento de Estado norteamericano ha mostrado su preocupación por lo que sucede en Argentina. Un informe confidencial de fecha del 1 de enero de 1977 subraya que "aunque la tortura, los tratos degradantes, humillantes e inhumanos no hayan sido nunca la regla de Argentina, se habla del empleo de ese tipo de métodos por las fuerzas de seguridad con el fin de obtener información de los prisioneros sospechosos de pertenecer a cualquier organización terrorista (...) Parece que hay catorce mil presos políticos sin proceso pendiente (...) Los servicios norteamericanos vienen solicitando los nombres de los reclusos y tratan de elaborar un informe sobre el antisemitismo (...)".

Según esto, cabrían esperanzas sobre la suerte de los diecisiete universitarios de Bahía Blanca detenidos el 4 del pasado agosto. Los médicos, enfermeras y asistentes sociales del hospital psiquiátrico Posadas, detenidos "con el apoyo de los tanques y la Avlación" en marzo de 1976 tendrían alguna posibilidad de salir a la calle. El psiquiatra Santiago Berma, encerrado en la penitenciaría de Campo de la Riviera, podría acaso abandonar su reclusión. Bajo la enorme presión del Gobierno de Washington, los universitarios Daniel Soto y Laura Torrents saldrían de la cárcel junto con sus hijos, así como el abogado Jacob Noe y el estudiante Klaus Ziechank. Centenares, millares de prisioneros serían puestos en libertad... ¡Simple espejismo!

Espejismo porque el informe del Departamento de Estado norteamericano acaba así: "A fin de mantener las relaciones profesionales con las Fuerzas Armadas argentinas (...), el Departamento de Estado piensa que por el momento interesa a los Estados Unidos seguir ofreciendo a Argentina su asistencia en materia de seguridad".

Lástima. Lástima para el doctor Enrique Sepúlveda, pediatra de sesenta y cinco años. El ejército argentino le detuvo en febrero de 1976. Luego fue salvajemente torturado en la cárcel de La Plata. Hoy agoniza. Tres años antes había sufrido tormentos aún peores en Santiago. El doctor Sepúlveda es chileno. ■ Foto: DANIEL GLUCKMANN. (Copyright "Le Nouvel Observateur".)